

REPÚBLICA DE COLOMBIA



SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL
Medellín, cinco (05) de julio de dos mil veintidós (2022)

DEMANDANTE	: LUIS FERNANDO CICERO USQUIANO
DEMANDADO :	: COLPENSIONES
TIPO DE PROCESO	: ORDINARIO
RADICADO NACIONAL	: 05-001-31-05-019-2021-00333-01
RADICADO INTERNO	: 123-22
DECISIÓN	: REVOCAR, ABSOLVER Y CONDENAR
ACTA NÚMERO	: 161

En la fecha, el TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL, procede a emitir sentencia de segunda instancia en la que se estudia el recurso de apelación, en el proceso de la referencia. La Sala, previa deliberación, adoptó el proyecto presentado por el ponente, Doctor HUGO ALEXANDER BEDOYA DÍAZ, que a continuación se traduce en la siguiente decisión:

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 de la ley 2213 del 13 de junio de 2022, la providencia en segunda instancia se profiere escrita.

ANTECEDENTES

Pretende la parte accionante, se DECLARE que es beneficiario de la pensión de sobreviviente o sustitución pensional, por la muerte de su cónyuge, la Sra. ROSA ANGÉLICA HOLGUÍN DE CICERO, quien falleció el 30 de noviembre de 2020.

Se CONDENE a la accionada al reconocimiento y pago de la sustitución pensional a partir del 30 de noviembre de 2020, junto con las mesadas adicionales de diciembre; los intereses moratorios y/o la indexación; y las costas procesales.

Las pretensiones de la demanda las fundamenta, en que los señores LUIS FERNANDO CICERO USQUIANO y ROSA ANGÉLICA HOLGUÍN DE CICERO contrajeron matrimonio el 12 de diciembre de 1970; convivieron en

forma permanente e ininterrumpida por 42 años, desde el 12 de diciembre de 1970 al 17 de mayo de 2012; de dicha unión se procrearon 5 hijos, los cuales son mayores de edad.

Expresa el actor, que mediante escritura pública No. 345 del 23 de julio de 2012, los conyugues decidieron liquidar de mutuo acuerdo la sociedad conyugal ante la Notaría Única de Santa Fe de Antioquia, pero dejaron indemne su vínculo conyugal. La Sra. ROSA ANGÉLICA HOLGUÍN DE CICERO falleció el 30 de noviembre de 2020. El demandante solicitó el reconocimiento y pago de la pensión de sobreviviente el 17 de diciembre de 2020, la cual fue negada en resolución 57.823 de 2021 por existir declaración extrajuicio en donde manifestaron que la convivencia de la pareja fue desde el 12 de diciembre de 1970 al 17 de mayo de 2012, fecha en que terminaron la convivencia. Los señores LUIS FERNANDO CICERO USQUIANO y ROSA ANGÉLICA HOLGUÍN DE CICERO tienen vigente su matrimonio religioso, a pesar de haberse liquidado la sociedad conyugal, el vínculo o unión conyugal está vigente, lo que hace que tenga derecho al reconocimiento de la sustitución pensional, y la pareja siguió con la ayuda mutua.

RESPUESTA A LA DEMANDA

La entidad demandada Colpensiones, en su contestación manifestó no constarle el tiempo de convivencia de la pareja; que, en el tiempo de convivencia, ambos cónyuges aportaran económicamente al sostenimiento del hogar; que a pesar de haberse liquidado a la sociedad conyugal, estaba vigente su matrimonio religioso; que el demandante tenga derecho a la prestación económica por reunir los requisitos de los arts 46 y 47 de la Ley 100 de 1993. Consideró que las afirmaciones relativas al mecanismo judicial como medio para obtener el reconocimiento de la prestación económica y a los intereses moratorios, no son hechos. Aceptó los demás hechos de la demanda. Y se opuso a la totalidad de las pretensiones de la demanda (expediente digital 09).

El Ministerio Público intervino, solicitando se decretaran y practicaran pruebas suficientes que acrediten los supuestos facticos esbozados en la demanda (expediente digital 08)

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

En sentencia del 9 de mayo de 2022, el Juzgado Diecinueve Laboral del Circuito de Medellín, CONDENÓ a Colpensiones a reconocer y pagar al demandante la pensión de sobrevivientes, a razón de 14 mesadas anuales; a reconocer y pagar al actor, la suma de \$18.504.230 por concepto de retroactivo pensional liquidado entre el 30 de noviembre de 2020 y el 30 de abril de 2022. A partir del 1º de mayo de 2022, Colpensiones debe continuar pagando al Sr. LUIS FERNANDO CICERO USQUIANO una mesada pensional de un salario mínimo mensual legal vigente, a razón de 14 mesadas pensionales anuales, sin perjuicio de los aumentos que el Gobierno Nacional determine para el efecto. De las sumas mencionadas, AUTORIZÓ para que de las sumas mencionadas descuente con destino al Sistema de Seguridad Social en Salud; condenó a Colpensiones, a reconocer y pagar al demandante las sumas dinerarias antes señaladas en forma indexada.

ABSOLVIÓ a Colpensiones, de las restantes pretensiones incoadas en su contra. DECLARÓ probada la excepción de IMPROCEDENCIA DE LA OBLIGACIÓN DE PAGAR INTERESES MORATORIOS. E impuso costas a Colpensiones.

IMPUGNACIÓN

La apoderada de la parte demandante solicita el reconocimiento y pago de los intereses moratorios, por considerar que existe el inciso 2º del literal b) del art. 47 de la Ley 100 de 1993, norma legal en la que se ampara que la entidad, y podía haber reconocido la pensión de sobreviviente desde que fue solicitada. Así mismo, existen sentencias donde se ratifica el derecho de la cónyuge separada de hecho, siempre y cuando no haya existido controversia, y en este evento con el interrogatorio de parte y los testigos, se puede evidenciar que no existió controversia en la existencia de otro compañero o cónyuge.

Y el apoderado de Colpensiones se aparta de la decisión emitida en primera instancia, razón por lo que solicita se estudie la decisión adoptada y se revoque, al considerar que no se cumplen los requisitos establecidos por la Ley 100 de 1993 para reconocer la pensión de sobreviviente ante la inexistencia de apoyo o auxilio mutuo, de una convivencia efectiva, de comprensión y la vida en común al momento de la muerte de la causante, advirtiendo que todo lo anterior, que se tratan de conductas que denotan una real convivencia del demandante y la causante.

Así mismo soporta su recurso en la sentencia 2014-00028 de 2020 del Consejo de Estado, en la que se expuso, que luego de liquidada la sociedad conyugal perdería el derecho a acceder a la prestación, porque la separación de hecho y liquidación de la sociedad conyugal, aunque no se terminen los efectos civiles del matrimonio, son causales suficientes para perder el derecho a la prestación económica.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

El apoderado de Colpensiones solicita que su representad sea absuelta de las pretensiones de la demanda, lo anterior lo fundamento realizando un recuento normativo de las normas aplicables, tal y como son los artículos 12 y 13 de la Ley 797 de 2003.

En materia jurisprudencial, invoca la sentencia T 030 de 2013 en la que se precisó frente al requerimiento de “acreditar que estuvo haciendo vida marital”, tiene por finalidad, beneficiar a quienes realmente compartían vida con el causante, proteger a quien ha convivido permanente, responsable y efectivamente con el pensionado, asistiéndole en sus últimos días; en la SL 6286 y 62413 del 2017 ha determinado que la convivencia no se suple con la procreación de los hijos en cualquier tiempo; es criterio de la Corte que para que el cónyuge pueda acceder a la pensión de sobrevivientes, no es suficiente con la demostración del requisito formal del vínculo matrimonial, “sino que es menester que se demuestre la efectiva convivencia de la pareja... lo que interesa para que esa convivencia exista es que en realidad se mantengan el afecto, el auxilio mutuo, el apoyo económico y el acompañamiento espiritual, característicos de la vida en pareja”.

En el caso del requisito de la convivencia de 5 años en cualquier tiempo para los eventos de cónyuges separados de hecho, retomó aparates de la SL 12442 del 2015.

Así mismo, señala el apoderado que en la investigación administrativa quedó demostrado que si bien la pareja ostentaban la calidad de cónyuges, no estableció el tiempo de convivencia con la causante, pues del análisis de las entrevistas realizadas de manera administrativa, las pruebas documentales recopiladas y las labores de campo realizadas, no hay claridad que existiera entre ellos lo deberes recíprocos compartir lecho,

techo y mesa y no existe prueba de los 5 años de convivencia previo al fallecimiento de la causante, por lo que el demandante no acredita ser miembro del grupo familiar del causante, ni haber mantenido vivo y actuante su vínculo mediante el auxilio mutuo, entendido como acompañamiento espiritual permanente y apoyo económico.

Respecto a la separación de hecho y la disolución de la sociedad conyugal, señala que el demandante y la causante decidieron de mutuo acuerdo liquidar la sociedad conyugal, dejando vigente su vínculo marital católico, no obstante, en sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca en sentencia de 30 de octubre de 2014 se negó las pretensiones en un caso similar, porque el contenido del inciso final del literal b) del artículo 47 de la Ley 100 de 1993 y la sentencia C-336 de 2014, es claro que el cónyuge supérstite separado de hecho tiene derecho a la pensión de sobrevivientes siempre que haya mantenido la sociedad conyugal. Así mismo trae apastes de la sentencia 2014-00028 de 2020 del Consejo de Estado del que concluye que el cónyuge supérstite separado de hecho que mantiene el vínculo jurídico del matrimonio, pero liquidó y disolvió la sociedad conyugal, no tiene derecho al reconocimiento de la sustitución pensional.

PRONUNCIAMIENTO JURÍDICO

El problema jurídico se centra en determinar, **con ocasión a los recursos de apelación**: i) Si el demandante tiene derecho al reconocimiento y pago de la sustitución pensional; ii) Si tiene derecho al reconocimiento y pago de los intereses moratorios.

Y en virtud del grado jurisdiccional de consulta, se deberá analizar: i) Si la parte demandante tiene derecho a la prestación económica, en los términos reconocidos en primera instancia; ii) Si hay lugar a reconocer la indexación de la condena; iii) Si hay lugar a la condena en costas impuestas en primera instancia.

1. De la sustitución pensional

Se encuentra acreditado en el proceso y no es objeto de discusión, que los señores LUIS FERNANDO CICERO USQUIANO y ROSA ANGÉLICA HOLGUÍN DE CICERO contrajeron matrimonio el 12 de diciembre de 1970 y en registro civil de matrimonio, existe nota marginal de la disolución y

liquidación de la sociedad conyugal, realizada por medio de la escritura pública 345 del 23 de julio de 2012 (fl. 16 del expediente digital 02); la Sra. ROSA ANGÉLICA HOLGUÍN DE CICERO falleció el 30 de noviembre de 2020 (fl. 15). De la resolución 57823 de 2021 se extrae que el ISS le reconoció pensión de vejez a la Sra. ROSA ANGÉLICA HOLGUÍN DE CICERO por medio de acto administrativo 101.595 del 13 de mayo de 2010; el demandante solicitó sustitución pensional el 17 de diciembre de 2020, la cual fue negada (fls. 18 a 19).

En primera instancia se reconoció el derecho a la prestación económica solicitada, por estar acreditada una convivencia de los señores LUIS FERNANDO CICERO USQUIANO y ROSA ANGÉLICA HOLGUÍN DE CICERO superior a 5 años en cualquier tiempo, y al momento de fallecimiento de la pensionada, el matrimonio seguía vigente, aunque se hubiera dado la disolución y liquidación de la sociedad conyugal, al considerar que en ese sentido se había agotado el ámbito económico mas no, las relaciones matrimoniales. Decisión que se REVOCARÁ por las siguientes razones:

En el presente caso, se tiene claro que al haber fallecido la Sra. ROSA ANGÉLICA HOLGUÍN DE CICERO el 30 de noviembre de 2020, la normatividad aplicable al caso concreto es el art. artículos 46 y 47 de la Ley 100 de 1993 modificado por los arts. 12 y 13 de la Ley 797 de 2003, los cuales señalan que:

*“Artículo 46. Requisitos para obtener la pensión de sobrevivientes. Tendrán derecho a la pensión de sobrevivientes:
(...)”*

2. Los miembros del grupo familiar del afiliado al sistema que fallezca, siempre y cuando éste hubiere cotizado cincuenta semanas dentro de los tres últimos años inmediatamente anteriores al fallecimiento. (...)”

“Artículo 47: Son beneficiarios de la pensión de sobrevivientes:

a) En forma vitalicia, el cónyuge o la compañera o compañero permanente o supérstite, siempre y cuando dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento del causante, tenga 30 o más años de edad. En caso de que la pensión de sobrevivencia se cause por muerte del pensionado, el cónyuge o la compañera o compañero permanente supérstite, deberá acreditar que estuvo haciendo vida marital con el causante hasta su muerte y haya convivido con el fallecido no menos de cinco (5) años continuos con anterioridad a su muerte.

b) (...)”

Si respecto de un pensionado hubiese un compañero o compañera permanente, con sociedad anterior conyugal no disuelta y derecho a percibir parte de la pensión de que tratan los literales a) y b) del presente artículo, dicha pensión se dividirá entre ellos (as) en proporción al tiempo de convivencia con el fallecido.

<Aparte subrayado CONDICIONALMENTE exequible> En caso de convivencia simultánea en los últimos cinco años, antes del fallecimiento del causante entre un cónyuge y una compañera o compañero permanente, la beneficiaria o el beneficiario de la pensión de sobreviviente será la esposa o el esposo. Si no existe convivencia simultánea y se mantiene vigente la unión conyugal pero hay una separación de hecho, la compañera o compañero permanente podrá reclamar una cuota parte de lo correspondiente al literal a en un porcentaje proporcional al tiempo convivido con el causante siempre y cuando haya sido superior a los últimos cinco años antes del fallecimiento del causante. La otra cuota parte le corresponderá a la cónyuge con la cual existe la sociedad conyugal vigente; (...) (Resalto de la Sala)

No existe discusión del cumplimiento del requisito de las semanas, por tratarse de la muerte de una pensionada.

Con respecto al requisito de la convivencia debe decirse lo siguiente:

Según la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia posición que es compartida por esta corporación, se exigen 5 años de convivencia antes de la muerte así se trate de afiliado o pensionado como se ha expuesto en las sentencias SL 877 de 2019 que retomó de a la sentencia SL 3468 de 2018 en la que se indicó: “... esta Sala ha sostenido que **la convivencia de cinco años** prevista en la citada norma **se predica tanto para el evento del fallecimiento del afiliado como del pensionado**, para efectos de la pensión de sobrevivientes, pues no existen razones válidas para establecer diferenciaciones entre los beneficiarios del primero y los del segundo y, porque, además, la convivencia constituye un elemento fundamental para la configuración del derecho pensional, que no sufrió modificaciones sustanciales con la entrada en vigencia de la Ley 797 de 2003, salvo en lo referente al tiempo mínimo de vida en común...”, y de la sentencia SL 14.068 de 2016 retomó “Este tema ya ha sido objeto de pronunciamiento por parte de esta Sala de la Corte, como se ve, además de la sentencia de casación que sirvió de sustentó al Tribunal, en entre otras, en la sentencia CSJ SL4835-2015, 22 abr. 2015, rad. 62770 en donde se reafirmó el criterio, según el cual, de conformidad con el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, tanto para beneficiarios de afiliados al sistema general de pensiones **o de pensionados**, el término de convivencia para la cónyuge o compañero (a)

*permanente es de **por lo menos cinco (5) años anteriores al fallecimiento del causante.** (...)” (Resalto de la Sala)*

Con respecto a esta manifestación, se advierte que en efecto la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia al interpretar el inciso 3° del literal b) del artículo 13 de la Ley 797 de 2003, ha expresado que es beneficiario de la pensión de sobrevivientes; el cónyuge separado de hecho que demuestre que convivió con el causante por lo menos (5) años en cualquier tiempo.

Lo anterior encuentra sustento entre otras en la sentencia SL 2015 de 2021, en la que con actualidad y precisión se resume esta interpretación de la norma, de la siguiente forma:

*“...dicha norma resguarda el derecho pensional del cónyuge separado de hecho, con vínculo matrimonial vigente, que demuestre **el desarrollo de una convivencia no inferior a cinco (5) años, en cualquier tiempo**, sin necesidad de más aditamentos o requisitos no previstos en la norma como el de mantener un «vínculo dinámico y actuante» hasta el momento de la muerte.” (Resalto de la Sala)*

No obstante, esta lectura textual de la norma deja al margen el aparte final del inciso 3° cuando dispone: *“La otra cuota parte le corresponderá a la cónyuge con la cual existe la sociedad conyugal vigente”*, lo que implica que a las dos exigencias fijadas por la Corte Suprema de Justicia se sume la existencia de una tercera, consistente en la existencia de sociedad conyugal vigente.

Con respecto de esa última exigencia se debe resaltar que fue objeto de demanda de constitucionalidad en el que se le atacó por ser violatoria del derecho de igualdad, en concreto por condicionar *“...el derecho a percibir una pensión de sobrevivientes a la existencia de sociedad conyugal, haciendo una diferenciación sin justificación con los cónyuges que no tienen una sociedad conyugal vigente, y tratando indistintamente los conceptos de matrimonio y sociedad conyugal, afectando además el derecho fundamental de los beneficiarios a la Seguridad Social”*.

Al estudiar el cargo, la Corte Constitucional en la sentencia C-515 de 2019, declaró su exequibilidad, indicando por demás que la exigencia de que la **sociedad conyugal se encuentre vigente** y no resulta caprichosa, toda vez que:

*“...El cónyuge separado de hecho con sociedad conyugal vigente mantiene en su totalidad los efectos de orden patrimonial. Si bien existe una ruptura de la cohabitación o convivencia y apoyo mutuo -a pesar de haber existido por lo menos 5 años-, los cónyuges no han expresado su deseo de dar por terminada su sociedad conyugal, al punto que preservan el vínculo económico y los derechos que de este se derivan. Por otro lado, **en el caso del cónyuge separado de hecho con sociedad conyugal disuelta, por decisión libre de los cónyuges se extinguen los efectos patrimoniales del vínculo matrimonial, aunado a la separación de hecho, por lo que, no existen en este caso vínculos afectivos o económicos que permitan inferir su calidad de beneficiario.**”* (Resalto de la Sala)

La lectura de este aparte, permite establecer que, para poder acceder a la pensión de sobrevivientes en ausencia de un vínculo sentimental por la separación de hecho, **debe existir al menos la voluntad de los cónyuges de mantener un vínculo económico, pero que, en ausencia de ambos, la prestación de sobrevivientes pierde su finalidad** pues, no existe en los cónyuges lazo alguno del que se pueda advertir una afectación que deba asumir el sistema de seguridad social en pensiones.

A pesar de lo anterior, la línea actual de la Corte Suprema de Justicia ha sido clara en afirmar que el hecho de exigir la prolongación de un vínculo actuante o económico con posterioridad a la separación de hecho y hasta el momento de la muerte es un requisito no previsto en el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, tal y como se ha expresado en la sentencia SL 2015 de 2021, con radicado 8.113, en la que se indicó:

“Para arribar a dicha decisión, a su vez, desde el punto de vista jurídico por el que se enfila el cargo, el Tribunal analizó el texto del artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por artículo 13 de la Ley 797 de 2003, en concordancia con la jurisprudencia desarrollada por esta corporación en torno al entendimiento de la norma y, con vista en ello, reconstruyó una subregla jurídica según la cual: el «cónyuge separado de hecho», con vínculo matrimonial vigente, conserva el derecho a recibir la pensión de sobrevivientes, si acredita la existencia de una convivencia de por lo menos cinco (5) años, desplegada «en cualquier tiempo», no necesariamente en los momentos inmediatamente anteriores a la muerte, así no exista otro potencial beneficiario en disputa. No obstante, teniendo como base, fundamentalmente, las sentencias CSJ SL12442- 2015, CSJ SL16949-2016 y CSJ SL4099-2017, agregó que ello era así, siempre y cuando, pese a la separación de cuerpos, se hubiera conservado «...un vínculo dinámico y actuante, de solidaridad y acompañamiento espiritual o económico...» hasta el momento de la muerte.

Esa orientación, pese a que en algún momento tuvo soporte en algunas decisiones emitidas por esta corporación, resulta errónea a la luz de la vigente interpretación que tiene esta Sala frente al artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, en tanto, como lo reclama la censura, dicha norma

resguarda el derecho pensional del cónyuge separado de hecho, con vínculo matrimonial vigente, que demuestre el desarrollo de una convivencia no inferior a cinco (5) años, en cualquier tiempo, sin necesidad de más aditamentos o requisitos no previstos en la norma como el de mantener un «vínculo dinámico y actuante» hasta el momento de la muerte.

En la sentencia CSJ SL5169-2019 se explicó ampliamente al respecto: (...)

Con fundamento en lo anterior, el Tribunal incurrió en el error jurídico denunciado en el cargo, al interpretar el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, y entender que, para ser beneficiario de la pensión de sobrevivientes, el cónyuge separado de hecho debe acreditar, además de cinco (5) años de convivencia en cualquier tiempo, «...la presencia de un vínculo dinámico y actuante, de solidaridad y acompañamiento espiritual o económico...» hasta el momento de la muerte” (Resalto fuera del texto)

En ese orden, la presente Sala comparte la posición de la Corte Constitucional, en la que se propugna la vigencia de la sociedad conyugal a efectos de ser reconocida la prestación económica a un cónyuge superstite separado de hecho, teniendo como base la finalidad de la pensión de sobreviviente. En consecuencia, puede concluirse que para dar aplicación al inciso 3° del artículo 13 de la Ley 797 de 2003, para reclamar la pensión de sobrevivientes por la muerte de cónyuge resulta necesario: i) La convivencia de cinco años en cualquier momento con anterioridad a la muerte, ii) La separación de hecho y **iii) La existencia de sociedad conyugal vigente.**

Partiendo de la normativa y jurisprudencia en cita, al analizar el caso que nos ocupa, considera esta Corporación que a pesar de existir una convivencia de la pareja por más de 5 años en cualquier tiempo y darse la separación de hecho, no se cumple el requisito de la vigencia de la sociedad conyugal, conforme se explica a continuación:

En relación a los requisitos de la convivencia de los 5 años de convivencia en cualquier tiempo antes de la muerte y la separación de hecho, conforme a la carga probatoria consagrada en los artículos 164 y 167 del C.G.P, era a la parte demandante a quien le correspondía probar la misma, carga probatoria esta que fue cumplida, toda vez que después de ser valorada toda la prueba en su conjunto se permite concluir que existió una convivencia por **41 años 5 meses y 6 días**, anteriores al fallecimiento de la Sra. ROSA ANGÉLICA HOLGUÍN DE CICERO, teniendo en cuenta lo siguiente:

1º. Los señores LUIS FERNANDO CICERO USQUIANO y ROSA ANGÉLICA HOLGUÍN DE CICERO contrajeron matrimonio el **12 de diciembre de 1970**.

2º. En el interrogatorio de parte, el demandante confesó haber convivido con la Sra. ROSA ANGÉLICA HOLGUÍN DE CICERO hasta el **17 de mayo de 2012**; que la convivencia tuvo lugar en Santa Fe de Antioquia – Barrio Buga; no era beneficiario en salud de la Sra. ROSA ANGÉLICA HOLGUÍN DE CICERO porque él tenía Sisbén; liquidaron y disolvieron la sociedad conyugal porque cada uno tenía su casa propia, y dicha liquidación se realizó sin problemas; al momento de liquidar la sociedad conyugal, la relación de ellos era buena, no vivían bajo el techo pero si relacionaban como pareja.

3º. La testigo MARÍA LILI MONTAYO OSPINA dijo conocer a los señores LUIS FERNANDO CICERO USQUIANO y ROSA ANGÉLICA HOLGUÍN DE CICERO en 1970 por ser vecina; que la pareja se casó en 1970 y vivieron juntos hasta el año 2012; la separación se dio que la infidelidad del demandante; no le conoció a otra pareja a Sra. ROSA ANGÉLICA HOLGUÍN DE CICERO; después del año 2012, la pareja no perdió la comunicación porque ellos se siguieron tratando; la pareja vivió en Santa Fe de Antioquia, en el Barrio Buga; con anterioridad al año 2012 no se habían separado; cuando la pareja vivía junta, la testigo hablaba todos los días con la Sra. ROSA ANGÉLICA HOLGUÍN DE CICERO porque eran amigas y la testigo diariamente le aplicaba la insulina a la causante.

4º. Y la testigo LINA MARÍA CICERO HOLGUIN (hija de la causante y del demandante) aseguró que la convivencia de los padres duró 42 años, y la convivencia finalizó en el mes de mayo de 2012; la separación se debió a una infidelidad de su padre; sus padres siguieron en comunicación y tenían una relación cordial por los hijos; su madre no tuvo convivencia con nadie más; la pareja convivió en Santa Fe de Antioquia en el Barrio Buga; con anterioridad al año 2012 ellos no se habían separado; sus padres liquidaron la sociedad conyugal porque cada uno tienen su herencia y tomaron la decisión de liquidarla para que en caso de muerte sus bienes fueran para los hijos, y esa decisión se tomó de mutuo acuerdo; después del año 2012 el demandante sufragaba sus gastos porque él trabajaba en oficios varios y en caso de necesitar alguna cosa, la Sra. ROSA ANGÉLICA HOLGUÍN DE CICERO estaba pendiente de ayudarle; el demandante no perteneció a la EPS de la causante porque él tenía Sisbén.

Partiendo de lo anterior, y después de ser valorada en su conjunto con base en las reglas de la **sana crítica y la libre formación del convencimiento** (art. 61 del CPL), se permite la Sala concluir que los señores LUIS FERNANDO CICERO USQUIANO y ROSA ANGÉLICA HOLGUÍN DE CICERO contrajeron matrimonio el 12 de diciembre de 1970 y dicha convivencia se extendió hasta el 17 de mayo de 2012, según confesión del demandante.

En relación con el requisito de la sociedad conyugal vigente, no se puede pasar por alto que aunado a la separación de hecho, los señores LUIS FERNANDO CICERO USQUIANO y ROSA ANGÉLICA HOLGUÍN DE CICERO de mutuo acuerdo, decidieron dar fin a la relación patrimonial con la liquidación y disolución de la sociedad conyugal, la cual se plasmó en la escritura pública 345 del 23 de julio de 2012 (fl. 16 del expediente digital 02), hecho que es relevante para negar la prestación económica solicitada por el Sr. LUIS FERNANDO CICERO USQUIANO bajo la perspectiva que además de no convivencia, a ello se sumó la finalización del vínculo económico con la liquidación y disolución de la sociedad conyugal, fundamentos facticos con los cuales se desvirtúa la finalidad de la sustitución pensional, y que corresponden a *“la protección de la familia como núcleo fundamental de la sociedad, de tal suerte que las personas que dependían económicamente del causante puedan seguir atendiendo sus necesidades de subsistencia, sin que vean alterada la situación social y económica con que contaban en vida del pensionado o afiliado que ha fallecido”*¹, sin embargo en este evento, al momento de la muerte de la pensionada, el Sr. LUIS FERNANDO CICERO USQUIANO no hacía parte del núcleo familiar de la causante y mucho menos estaba amparado económicamente por la misma.

En consideración a lo expresado, lo legal y pertinente será REVOCAR la decisión de primera instancia, y en su lugar ABSOLVER a Colpensiones de la totalidad de las pretensiones invocadas en su contra.

2. Costas

Se REVOCAR las costas impuestas en primera instancia, para en su lugar CONDENAR a la parte demandante al pago de las mismas.

¹ Sentencia C 1094 de 2003

En esta instancia se condenan en la suma de \$500.000 a cargo del demandante, en aplicación del numeral 4º del art. 365 del CGP que reza: “4. *Cuando la sentencia de segunda instancia **revoque totalmente la del inferior**, la parte vencida será condenada a pagar las costas de ambas instancias.*”

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida por el Juzgado Diecinueve Laboral del Circuito de Medellín, para en su lugar **ABSOLVER** a Colpensiones de la totalidad de las pretensiones invocadas en su contra, de conformidad con lo expresado en la parte motiva de la presente providencia.

SEGUNDO: REVOCAR las costas impuestas en primera instancia, para en su lugar **CONDENAR** a la parte demandante al pago de las mismas. En esta instancia se condenan en la suma de \$500.000 a cargo del demandante, en aplicación del numeral 4º del art. 365 del CGP.

TERCERO: Las anteriores decisiones se notifican por EDICTO, conforme lo dispuesto en la providencia AL 2550, radicación 89628 del 23 de junio de 2021 de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia.

Los Magistrados.



HUGO ALEXANDER BEDOYA DÍAZ



GUILLERMO CARDONA MARTÍNEZ



CARMEN HELENA CASTAÑO CARDONA

Radicado Único Nacional 05-001-31-05-019-2021-00333-01
Radicado Interno 123-22



SECRETARIA SALA LABORAL
TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN

EDICTO VIRTUAL

La secretaria de la Sala laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín notifica a las partes la sentencia

DEMANDANTE	: LUIS FERNANDO CICERO USQUIANO
DEMANDADO :	: COLPENSIONES
TIPO DE PROCESO	: ORDINARIO
RADICADO NACIONAL	: 05-001-31-05-019-2021-00333-01
RADICADO INTERNO	: 123-22
DECISIÓN	: REVOCAR, ABSOLVER Y CONDENAR

Magistrado Ponente
HUGO ALEXANDER BEDOYA DIAZ

El presente edicto se fija en la página web institucional de la Rama Judicial <https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/126> por el término de un (01) día hábil. La notificación se entenderá surtida al vencimiento del término de fijación del edicto.

CONSTANCIA DE FIJACIÓN

Fijado el 06 de julio de 2022 a las 8:00am

CONSTANCIA DE DESFIJACIÓN

Se desfija el 06 de julio de 2022 a la 5:00pm


RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS
SECRETARIO